

los dossiers

de EL SIGLO



**La mala salud
de la democracia
española**

Informe Fundación Alternativas: la opacidad, un lastre en la confianza hacia las instituciones

La democracia española, también en crisis

La calidad de la democracia española se ha deteriorado a lo largo del último año. Esta es la principal conclusión del *Informe sobre la Democracia en España 2013*, presentado la semana pasada por la Fundación Alternativas, que señala cómo la crisis económica y las políticas que se han venido implementando a raíz de ella, han generado otra crisis, que tiene en el deterioro de la confianza en las instituciones un elemento clave. Según el documento, la opacidad que ha reinado hasta ahora en los mecanismos del Estado, junto con la patrimonialización de órganos como el CGPJ por parte de PP y PSOE y la quiebra en el prestigio de la Monarquía, entre otros factores, han colocado a la democracia española en una situación muy difícil.



La democracia española ha dado "un gran salto hacia atrás" en el

Por E. S.

En este último año, nuestro país ha dado "un gran salto hacia atrás", según afirma el 'Informe sobre la Democracia en España' de 2013. El estado de nuestra democracia ha empeorado dramáticamente, hasta el extremo de situarnos en posición de cola, tanto si tenemos en cuenta a los países con mejor salud democrática como a los que tradicionalmente han estado peor. Según recoge el documen-

to elaborado por la Fundación Alternativas, los datos comparados apuntan todos en la misma dirección. El porcentaje de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia se sitúa en España 17 puntos porcentuales por encima de la media europea. Si nos comparamos con otros continentes, en una muestra de 21 países, España es el que tiene un porcentaje menor de ciudadanos satisfechos con el rumbo emprendido por su país, únicamente superada por Grecia. La desconfianza en el gobierno y en el parla-

mento nacionales son la segunda y tercera más altas de la Unión Europea. Igualmente, la desconfianza en la Unión se sitúa en segunda posición.

El documento cita al poeta Miguel Hernández, para explicar que la gente se ha encontrado en el primer año de gobierno del Partido Popular con la confluencia de tres heridas: la profundización de una crisis económica que por su profundidad y duración constituye ya el acontecimiento central de nuestra época, y que cambiará sin duda la



EUROPA PRESS

último año, según el 'Informe sobre la Democracia en España' de 2013, de la Fundación Alternativas.

forma de pensar y de vivir; una deriva política en la que se pone en cuestión casi todo lo conseguido y ante la cual las principales formaciones políticas no solo no han encontrado modos de consenso, sino que se han visto afectadas por fenómenos de corrupción que han generado decepción y una fuerte alarma social; y un deterioro institucional acentuado, que conlleva la percepción de que pocos de los organismos de los que nos habíamos dotado para convivir en la joven democracia española (desde el más

alto de ellos, la monarquía, como forma de Estado, hasta la propia configuración territorial autonómica) continúan vigentes y son eficaces para seguir transitando.

En el caso español, la confianza en las instituciones ha venido mermando sensiblemente durante los últimos años, como recogen los sondeos del CIS. El 'Informe sobre la democracia 2013' subraya que unas instituciones prestigiadas y transparentes actúan como freno y autolimitación del poder político y, junto con lo que se puede

llamar "comprensión informada", que deben facilitar unos medios de comunicación plurales, da a los ciudadanos la oportunidad de conocer y decidir qué decisiones están siendo las más correctas desde el punto de vista de sus intereses. Sin embargo, en España, las instituciones democráticas, en torno a las cuales se sigue organizando el sistema entero, están en realidad muy alejadas de la vida de los ciudadanos y son crecientemente percibidas por estos como instrumentos al servicio de intereses particulares. Es más, según el documento elaborado por la Fundación Alternativas, este deterioro no es solo consecuencia de la formidable crisis económica que estalló en 2008 (aunque es indudable que ha tenido una fuerte repercusión), sino que ese des-

La insatisfacción con el funcionamiento de la democracia se sitúa en España en 17 puntos, sólo superada por Grecia

trozo institucional se había venido produciendo desde antes, que se agudizó precisamente en los periodos de bonanza económica y que es esa circunstancia la que ha empeorado los efectos de la crisis económica, y no al contrario.

Un problema general que ha contribuido a la pérdida de prestigio de las instituciones en España ha sido su funcionamiento considerablemente opaco. La falta de transparencia política y económica ha dificultado la lucha contra la corrupción y ha disminuido la confianza en el correcto funcionamiento de la mayoría de las instituciones, desde los partidos políticos hasta el Parlamento. La exigencia de que el Congreso aprobase una ley semejante a las *Freedom Information Acts* que funcionan en otros países europeos viene siendo formulada por asociaciones ciudadanas en defensa del buen gobierno desde hace años, sin resultado alguno ni en los periodos socialistas ni en los populares.

El PP anunció a los pocos meses de su llegada a La Moncloa la tramitación urgente de una ley de transparencia y buen gobierno que afectaría a buena parte del sector

público español. El borrador hecho público inicialmente provocó las protestas de la asociación Transparencia Internacional, entre otras cosas porque “no contempla ningún tipo de infracciones ni de sanciones a políticos y funcionarios públicos por el incumplimiento de las normas de transparencia”. Tampoco suscitó acuerdo el régimen de “silencio administrativo” o la limitación de acceso a la información en demasiadas excepciones abstractas, desde cuestiones que “puedan perjudicar la política económica y monetaria” o el medio ambiente hasta la exclusión de la Casa Real y los propios partidos políticos. España es el único país de la Unión Europea que no tiene una ley reguladora del derecho al acceso a la información y que no somete a reglas de transparencia a su sector público. Más de 400 en-

tes públicos de ámbito estatal, 2.000 autonómicos y casi 19.000 de ámbito local, según datos de Transparencia Internacional, continúan esquivando sus obligaciones de control y vigilancia.

El ‘Informe sobre la democracia en España’ también alude a la situación que ha sufrido el Tribunal Constitucional a lo largo de los últimos años, subrayando que PP y PSOE han renunciado a buscar el consenso sobre la renovación de los magistrados. El texto explica que las burocracias de los partidos interpretaron que bastaba con que cada uno se “apropiase” de su respectiva cuota sobre la que podían decidir sin interferencias ni negociaciones, y esa decisión produjo daños formidables en el alto tribunal y tensiones traducidas en recusaciones de alguno de sus miembros en el debate de asuntos de

gran importancia, como el estatuto catalán. Un problema secundario, pero no menos perjudicial para la imagen de la institución, es el hecho de que el TC ha sido utilizado por los partidos políticos como una especie de tercera cámara legislativa, con lo que ello supone de evidente implicación en batallas estrictamente políticas. Fueron sonados en su momento el ya mencionado recurso contra el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero también los presentados contra la Ley de Matrimonio Homosexual o contra la creación de la asignatura educación para la ciudadanía. Teniendo en cuenta que el TC ha llegado a acumular un retraso de hasta 13 años en la resolución de algunos recursos presentados contra otras leyes polémicas, queda claro que el prestigio de la institución está sometido a serias tensiones.

La dictadura del ajuste permanente

El hecho de que los gobernantes perciban como ineludible la adopción de determinadas políticas tremendamente impopulares lleva a los gobiernos a no debatir públicamente sobre qué políticas son más o menos deseables, a tomar decisiones con fuertes consecuencias distributivas de espaldas a la ciudadanía, y a delegar en tecnócratas o en organismos supranacionales la adopción de medidas de políticas económicas. El ‘Informe sobre la Democracia en España 2013’ se cuestiona hasta qué punto esta pérdida en la calidad de la democracia puede resultar aceptable para la ciudadanía.

El documento explica que conforme ha ido avanzando y agudizándose la crisis, hemos ido aprendiendo algunas cosas sobre esta cuestión. En primer lugar, que el grado de tolerancia de al menos una parte de la ciudadanía hacia este orden de cosas no es pequeño. Podemos solo especular sobre las causas de es-

ta tolerancia, como el miedo al descalabro económico que podría suponer un cambio radical de rumbo en las políticas de ajuste, pero el hecho indiscutible es que las sociedades europeas, al menos mientras perciban que sus economías están en una situación crítica, parecen dispuestas a tolerar dosis mucho mayores de políticas impopulares y formas impopulares de hacer política por parte de sus gobiernos que las que imaginábamos hace solo unos años. Sin embargo, el texto plantea que aunque esto sea así en la actualidad no implica que vaya a ser así para siempre, y podemos imaginar dos mecanismos por los cuales la adopción de políticas impopulares deje de ser democráticamente sostenible en el medio plazo. Primero, en estos años de crisis hemos podido comprobar cómo los grupos de “perdedores” de la austeridad y de “ganadores” del ajuste no son, en absoluto, fijos. Un mayor alargamiento de la crisis podría provocar

cambios importantes en la relación de fuerzas de ambos grupos, con consecuencias poco previsibles.

Un segundo canal por el cual podríamos pensar que el orden económico-político actual es más frágil de lo que pueda parecer es que el cuestionamiento de esta forma de hacer política es previsible que reaparezca cuando las condiciones económicas mejoren. Dicho de otra forma, si lo que hace a las sociedades tolerar el orden actual de las cosas (depresión económica, carencia de alternativas, políticas impopulares, reparto de los costes del ajuste percibido como injusto, etc.) es solo el miedo a las consecuencias catastróficas que en la situación actual tendrían las políticas que podrían cuestionarlo, podríamos pensar que, cuando este miedo desaparezca —porque el ciclo económico se haya revertido—, las demandas por un mayor control democrático de las decisiones económicas reaparecerán de una forma o de otra.

Por otra parte, a pesar de que siguen explotando de cara a sus votantes la idea de que su margen de maniobra es muy limitado, el informe señala que, paradójicamente,



La tolerancia de la opinión pública hacia las políticas

En relación a lo sucedido con el Tribunal Constitucional, el texto publicado por la Fundación Alternativas señala que la misma lucha por conseguir o impedir mayorías en CGPJ ha sido origen de penosos espectáculos ante la opinión pública. El CGPJ, que tiene la delicada función de encargarse del gobierno de los jueces, ha tenido problemas para su funcionamiento prácticamente desde su creación, pero no solo por problemas de organización interna, sino por su ineficacia en la labor encomendada. Por ejemplo, el informe señala que desde su puesta en marcha por la Ley Orgánica de 10 de enero de 1980, todavía no ha conseguido dotarse de un sistema informático equiparable al que utilizan Hacienda o la Seguridad Social.

Los problemas de organización de la jus-

ticia española son bien conocidos. En total hay 4.604 jueces (para una población de más de 45 millones de habitantes), pero un 4% está en situación de excedencia y en torno a 500, según datos del propio Consejo, desarrolla servicios especiales en otras 160 administraciones. Un número insuficiente de jueces significa una carga de trabajo desproporcionada y una ralentización de su funcionamiento, que, en algunos casos, llega al esperpento o produce resultados injustos.

La elección de los 20 vocales responsables de todo ese sistema responde a una lógica partidista y los candidatos se buscan más atendiendo a su fidelidad política que a su competencia profesional reconocida, como ha señalado el magistrado Diego Íñiguez en repetidos artículos, según explica el informe, y la opinión pública es perfecta-

mente consciente de ello. Para colmo, el CGPJ se colocó en una posición insostenible el año pasado al desvelarse su jornada de trabajo ("semana caribeña") y, muy especialmente, al comprobarse la escasa justificación de los viajes y gastos realizados por su presidente, el magistrado Carlos Dívar, que había sido nombrado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, con el apoyo entusiasta del PP, y que usó aparentemente dinero público en gastos privados.

En cuanto al problema que suscita el fuerte desprestigio que experimentan el Parlamento y los partidos políticos es distinto. Al referirnos al progresivo desprestigio del Parlamento y del efecto demoleedor que ha tenido la crisis en su imagen, habría que aclarar que se trata del Congreso de los Diputados, porque el Senado ha sido presentado



F. MORENO

impopulares podría venirse abajo cuando la economía remonte.

los gobiernos siguen siendo enormemente celosos a la hora de salvaguardar las pequeñas parcelas de discrecionalidad que aún poseen. En España hemos presenciado, por ejemplo, durante el año 2012 cómo el Gobierno ha resistido enormes presiones de todo tipo para acordar con las instituciones europeas un "rescate" que, por un lado, hubiese aliviado la situación económica en el corto plazo, pero que hubiese supuesto una pérdida de control político enorme para el Ejecutivo. Parece también que la forma concreta que toman algunas reformas (por ejemplo, el muy limitado ataque a la dualidad en el mercado de trabajo, por ejemplo) o políticas (por ejemplo, el sesgo generacional de las políticas de protección social) también responde a cálculos electorales de los gobernantes.

En definitiva, los gobiernos son conscientes de que necesitan explotar el margen de maniobra política para poder responder ante sus votantes. El problema es que, para muchos ciudadanos, este pequeño margen de maniobra no les parece suficiente. Las percepciones de que la acción del Gobierno no responde

a las demandas de la ciudadanía son cada vez mayores, y el alejamiento de los ciudadanos respecto de la política institucional (pero no así del interés por la política) aumenta. En el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de enero de 2013, por primera vez en la serie histórica, más de dos de cada tres encuestados no declaraba una intención directa de voto para ninguno de los dos principales partidos. ¿No son entonces los ciudadanos conscientes de estos esfuerzos que hacen los gobernantes por explotar los pequeños resquicios de discrecionalidad que aún tienen para responder a sus demandas? Puede que los ciudadanos juzguen estas respuestas insuficientes, o que, en un contexto de permanente ajuste, las decisiones distributivas de los gobiernos siempre tenderán a ser percibidas como agravios por parte de casi todos los grupos sociales. En cualquier caso, sigue pareciendo poco sostenible en el tiempo una situación en la que los gobiernos elegidos de forma democrática sean sistemáticamente incapaces de responder a las demandas mayoritarias de la ciudadanía.

El Congreso, en entredicho

En conjunto, ¿aprueba o desaprueba la forma en que el Congreso de los Diputados está llevando a cabo su trabajo?

(En porcentajes)

	TOTAL ENTREVISTADOS		VOTANTES DE	
			PP	PSOE
Aprueba	13	22	9	
Desaprueba	83	75	90	
Saldo aprueba-desaprueba		-70	-53	-81

¿Siente que el Congreso de los Diputados representa...?

(En porcentajes)

	TOTAL ENTREVISTADOS		VOTANTES DE	
			PP	PSOE
A la mayoría de los españoles				
Sí	24	3422		
No	74	65	76	
A usted personalmente				
Sí	18	31	17	
No	80	66	82	

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes corresponde a No sabe/no contesta.

Fuente: 'Informe sobre la Democracia en España 2013' con datos de Metroscopia (febrero de 2013).

desde muy pronto a la opinión pública como un órgano relativamente inútil, tanto por los propios partidos como por los medios de comunicación. Lo que importa ahora es resaltar las dificultades que tiene el Congreso para cumplir las funciones de control del Gobierno y de caja de resonancia de las preocupaciones ciudadanas.

El informe cita el barómetro del CIS de noviembre de 2010, en el que, a la pregunta de si cree que en el Congreso de los Diputados se discuten los problemas fundamentales del país o se presta demasiada atención a problemas de poca importancia, solo el 25,6% creía que se discuten problemas importantes, mientras que el 61% opinaba que la Cámara baja se distrae con temas banales. Un sondeo posterior, realizado en febrero de 2013 por Metroscopia, indica que tres de cada cuatro ciudadanos considera que el Congreso no representa a la mayoría

de los españoles, y un porcentaje incluso superior (80%) no se siente personalmente representado por él.

El Congreso ha realizado en el pasado algunos intentos de afrontar las dificultades para cumplir las funciones que le atribuyen los ciudadanos. Se creó, por ejemplo, un nuevo sistema de preguntas y respuestas, que debería dar origen a un mejor ejercicio del control del Gobierno, pero cuyo resultado no ha sido satisfactorio, al percibirse como un mero intercambio genérico de reproches, sin voluntad de satisfacer la demanda de información. Sigue sin solucionarse el problema de unas comisiones de investigación que realicen un trabajo eficaz y finalicen en un informe solvente sobre el asunto investigado. Las distintas propuestas, en el sentido de que dos grupos parlamentarios o un 10% de diputados fueran suficientes para crear una comisión de este ti-

po, han fracasado siempre, por el bloqueo, en unas ocasiones del PSOE y, en otras, del PP. La crisis bancaria no ha sido objeto de ninguna investigación parlamentaria seria, y las subcomisiones de Reestructuración Bancaria y Saneamiento Financiero y de Transparencia de Productos Financieros e Hipotecarios, ambas dependientes de la Comisión de Economía y Competitividad, y constituidas en mayo de 2012, no han dado origen a ningún documento analítico que haya podido ser discutido públicamente.

Por otra parte, los intentos de revitalizar y de dar sentido a la actividad del Senado han sido numerosísimos sobre el papel... y nulos en la práctica. Existe una infinidad de estudios académicos y de trabajos internos de los partidos sobre la mejor manera de acentuar el carácter del Senado como cámara de representación territorial, pero poco o nada se ha avanzado en ese camino.

En el caso de los partidos políticos, el documento elaborado por la Fundación Alternativas afirma que la opinión sobre ellos ha sido contradictoria en los últimos años. En 2010, todavía un 78,8% de los ciudadanos compartía la opinión de que los partidos son necesarios para la democracia (frente a un 92% en un sondeo de 1980), pero ya un 55,1% creía que los "partidos solo sirven para dividir a la gente". El documento cita al profesor José María Maravall, que en 'Las promesas políticas' (Galaxia Gutenberg, 2013) escribe que no es concebible la democracia representativa sin los partidos políticos, pero resalta los cambios experimentados por la opinión pública española a ese respecto en ese período. "Es posible que ello refleje el cierre organizativo que los partidos políticos practicaron en esos años, sus prácticas burocráticas y clientelistas, sus listas electorales cerradas, bloqueadas y elaboradas lejos de los votantes, sus políticas internas opacas y aparentemente guiadas por intereses de poder, la sustitución de ideas por palabras en sus discursos".

El 'Informe sobre la democracia en España 2013' resalta que la existencia del peligro de desafección política de los ciudadanos españoles se viene reconociendo desde principios de 1990. Por ejemplo, el programa electoral del PP de 1989, por ejemplo, proponía introducir listas abiertas en los partidos, reformar los reglamentos del Congre-

so y del Senado. A mediados de los noventa, el PSOE proponía modificar el régimen electoral “para mejorar los mecanismos de representación política”.

Un funcionamiento más democrático de los partidos (obligatoriedad de celebrar primarias, reforma electoral que desbloquee las listas de candidatos, obligación de celebrar debates televisivos, etc.) ayudaría, seguramente, a ampliar el espacio de debate político y, en ese sentido, podría convertirse en un elemento importante para permitir una discusión seria sobre el respeto a la independencia de las instituciones del Estado. Por el momento, sin embargo, no existen indicios de que la preocupación por garantizar esa independencia sea una de las prioridades de los dos principales partidos de poder. Sus programas electorales aluden, con frecuencia, a nuevos impulsos democráticos, pero nunca a la excesiva politización de todas las facetas de la vida pública o, mejor dicho, a la excesiva influencia de las burocracias partidistas, tanto en la marcha cotidiana de las instituciones como en la de las



El 83% de los españoles desaprueba el trabajo del Congreso.

Administraciones Públicas en su conjunto.

La institución monárquica, que es una de las pocas, por no decir la única, que se ha mantenido hasta ahora fuera de la competición política y fuera del control partidista, se ve sometida también a un proceso de deterioro, a un nuevo escrutinio público y a nuevas demandas de transparencia y control, debido, sobre todo, a la trascendencia alcanzada por el llamado *caso Urdangarin*. Al margen de las cuestiones relacionadas con el prestigio del rey y del príncipe de Asturias, queda pendiente otro tema sustancial: la transparencia a la que debe someterse el funcionamiento de la Casa Real y su financiación. El coste del mantenimiento de la Jefatura del Estado, es decir, de la monarquía española, es bastante opaco, porque no se financia exclusivamente con la partida “Casa Real de Su Majestad el Rey” que figura en los Presupuestos Generales, como habitualmente se cree, sino también con otras cantidades distribuidas en otros capítulos presupuestarios. Por ejemplo, el documento explica que no se financia con la partida de la

Los partidos y la Iglesia, las instituciones menos fiables

Respuesta a la pregunta: ¿En qué medida confía Ud. en cada uno de estos grupos o instituciones? (Escala de 0 a 10, en la que 0 significa “ninguna confianza” y 10, “total confianza”).

	NINGUNA CONFIANZA				TOTAL CONFIANZA				NS	NC(n*)
	(0-1)	(2-3)	(4-6)	(7-8)	(9-10)					
Los medios de comunicación	9,9	12,3	52,9	18,1	3,2	2,9	0,7	(2.481)		
Los partidos políticos	23,4	22,0	43,2	6,0	0,8	3,6	1,0	(2.481)		
Las ONG	5,1	6,2	40,0	29,4	8,5	0,0	0,8	(2.481)		
Las organizaciones empresariales	11,7	13,3	48,0	9,6	1,2	15,1	1,0	(2.481)		
Los sindicatos	15,2	15,1	43,5	12,4	2,0	10,9	0,9	(2.481)		
La Iglesia católica	28,7	13,1	33,7	12,3	6,4	4,2	1,7	(2.481)		

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA	(N**)
Los medios de comunicación	4,84	2,29	(2.391)
Los partidos políticos	3,41	2,32	(2.366)
Las ONG	5,90	2,29	(2.215)
Las organizaciones empresariales	4,31	2,22	(2.081)
Los sindicatos	4,22	2,44	(2.188)
La Iglesia católica	3,84	3,03	(2.336)

*Tamaño de la población. **Tamaño de la muestra. Fuente: ‘Informe sobre la Democracia en España 2013’ con datos del CIS (octubre de 2006).

Casa Real el mantenimiento ni el servicio del palacio de La Zarzuela y su predio; ni de la casa en la que habita el príncipe de Asturias; ni el palacio de la Almudaina, con sus jardines, en Palma de Mallorca, en el que la familia real suele pasar su veraneo. Todos esos edificios, como el Palacio Real, El Escorial, La Granja, el palacio del Pardo o el de Riofrío son propiedad de Patrimonio Nacional, que tiene su propio presupuesto para hacer frente a esos gastos. Lo mismo sucede con los vehículos de que dispone la Familia Real.

Dentro de las instituciones necesarias para el desarrollo de una democracia moderna figura la existencia de medios de comunicación libres e independientes, capaces de ayudar a formar una opinión pública informada que comprenda el alcance de las decisiones que se adoptan en su nombre. Pese al indudable deterioro en la calidad que ha experimentado, en términos generales, el

Un funcionamiento más democrático de los partidos ayudaría a ampliar el espacio de debate político

panorama de los medios de comunicación españoles, afectado muy duramente por reducciones de plantilla, cierres de correspondencias en el extranjero y recorte en todo tipo de recursos disponibles, la confianza de los ciudadanos en ellos parece haber mejorado algo en el último año, según datos del barómetro que lleva a cabo la consultora de comunicación Edelman, una entidad especializada privada. Según esa escala, las ONG siguen encabezando el ranking de confianza, pero los medios de comunicación se sitúan inmediatamente detrás (han pasado del 46% al 50%), por encima de las empresas,

los sindicatos y el Gobierno.

La recuperación señalada por la consultora Edelman puede deberse a que algunos medios de comunicación han dedicado una renovada atención a investigar y divulgar los casos de corrupción política, pero no deberían ocultar el hecho de que los españoles creen que los propios medios de comunicación son corruptos. Transparencia Internacional, por ejemplo, colocaba a los medios en 3,4 puntos en un índice en el que 5 es la mayor corrupción. Claro que partidos políticos y empresas siguen figurando por delante con 3,9 y 3,7, respectivamente. La percepción de corrupción en el caso de los medios no se debe tanto, según el presidente de Transparencia Internacional en España, Jesús Lizcano, a la creencia de que reciban sobornos o realicen actividades ilícitas, como a la opacidad que advierten en sus relaciones con los políticos y los poderes económicos. ●

Felipe González, ilustre invitado de la Fundación Alternativas

La Fundación Alternativas ha presentado en la Feria del Libro de Madrid su séptimo 'Informe sobre la Democracia en España'. El invitado 'estrella' de la presentación fue el expresidente del Gobierno, Felipe González, que estuvo acompañado del Presidente de la Fundación, Pere Portabella, la directora del Laboratorio de la Fundación, Belén Barreiro y el periodista y director del informe, Joaquín Estefanía. Frente a ellos escuchaban con atención la exministra de Defensa, Carme Chacón, y la responsable económica de la Ejecutiva federal del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero.

Felipe González volvía a ser el invitado de lujo -en 2012 también participó como ponente- de la Fundación Alternativas. En esta edición, el histórico líder socialista ha hecho una radiografía de la crisis política económica, social e institucional, que él

resume en la llamada crisis de gobernanza. González ha celebrado "con alegría" las movilizaciones sociales, sin embargo, ha abogado por su correcta articulación política porque "si no podrían convertirse en movimientos populistas" que únicamente servirían para aglutinar a "salvadores de la patria". "Alguno se ofrece por ahí", sentenció en clara referencia a José María Aznar, para mantener vivo el pulso entre ambos expresidentes. Asimismo, González se opuso a la gestión de Rajoy, haciendo una comparación entre las reformas del Ejecutivo actual y el de Zapatero. "El Gobierno de Rajoy ha hecho 20 Decretos Leyes en seis meses, cuatro veces más que el Gobierno de Zapatero" ha sentenciado. Más allá fue González cuando apuntó que Zapatero en 2010 "rectificó y cambió su programa político," mientras que "el Gobierno actual directamente ha



González reconoce la crisis del bipartidismo

olvidado su programa". Además, el exdirigente socialista le recordó a Rajoy, en plena polémica del déficit a la carta, que "es irracional pedir un déficit igual para todos".

Además de su crítica a la gestión actual, el expresidente ha hecho alusión a la crisis del bipartidismo -aunque reconoció que "cuando lo liquiden lo volveremos a reclamar"-, ha respaldado la necesidad de celebrar elecciones primarias, tanto para la elección de los candidatos como de

los órganos políticos, y ha criticado el déficit democrático europeo, considerando que "en el centro de la gobernanza solo deben estar cuestiones que se gobiernen mejor en ese centro". González, ha repetido por activa y por pasiva que el origen de la crisis está en el "mal funcionamiento del sistema financiero", el primer mercado que debe regular la política, según el expresidente.

El Presidente de la Fundación, Pere Portabella, ha criticado, por un lado, la ausencia de una reforma en la Constitución Española y, por otro, la negativa política a desarrollar una Reforma Electoral que sirva "para acercar al ciudadano". Belén Barreiro y Joaquín Estefanía, por su parte, ahondaron en los datos sobre España analizados en el libro, como el índice de pobreza extrema -que ha alcanzado el 18%-, la tasa de paro de los 'cabeza de familia'-un 21%- o el desencanto social con la política, dado que el porcentaje de abstención o la intención voto en blanco en 2012 supera el 50%.

Por C. H.